

EL MOVIMIENTO OBRERO Y EL ÚLTIMO GOBIERNO PERONISTA (1973-1976)

Por **Juan Carlos Torre***

INTRODUCCIÓN

A la cabeza de una multiforme coalición de fuerzas sociales y políticas, Perón regresó a la Argentina después de 18 años de exilio y derrotó la tentativa de undécima hora ensayada por el general Lanusse con vistas a una salida negociada para el régimen militar instaurado en 1966. Los militares abandonaron el gobierno, llevándose como consuelo la visión del viejo caudillo populista entregado a la titánica tarea que ellos no habían podido realizar: construir un orden político capaz de poner bajo control las expectativas y las pasiones desatadas por casi dos décadas de frustración y discordia. Este fue, en efecto, el plan de Perón, cuando propuso a los sectores del frente electoral triunfante organizar el futuro gobierno sobre la base, por un lado, del acuerdo político entre los dos grandes partidos representados en el parlamento -peronistas y radicales- y, por otro, del Pacto Social entre los empresarios y los sindicatos.

Pero si este Perón que los argentinos recibían después de tan larga ausencia parecía capaz de redefinir desde sus flamantes funciones de gobierno las políticas desestabilizadoras que había alentado desde la oposición, ¿podía esperarse, acaso, una ductilidad semejante por parte de su movimiento? Un movimiento que se había desarrollado en los últimos años como fuerza de contestación y que escasamente se sentía comprometido con la suerte de un sistema institucional en el que su participación estuvo casi siempre retaceada. ¿Cómo imponer, pues, la necesidad de las coincidencias políticas a quienes las reiteradas proscripciones habían formado en la conciencia aguda de las diferencias? ¿Cómo convencer de que era preciso compatibilizar las demandas sectoriales con la salud de la economía a quienes habían visto retroceder, monótonamente, su participación en la distribución del ingreso? Finalmente ¿cómo obtener la paz de aquellos cuya violencia había sido previamente exaltada?

Digamos que, detrás de su proclamada fidelidad a Perón, el vasto movimiento congregado alrededor de su retorno escondía mal su tentación por la intransigencia, el peso de sus insatisfacciones. En realidad, los llamados a la conciliación que hacía el viejo caudillo tenían una acogida más feliz entre sus adversarios políticos que entre sus propios seguidores. Los primeros veían en el mensaje de Perón una promesa de convivencia para una comunidad convulsionada por la radicalización de los conflictos, mientras que los segundos preferían creer que, con el triunfo electoral del 11 de marzo, había llegado la hora de la esperada reparación histórica. El plan de reconstrucción política se encontraba, así, frente a un primer obstáculo: el hiato existente entre la fórmula de reconciliación propuesta por Perón y el espíritu dominante en la movilización que lo devolvía al gobierno.

No menos graves eran las limitaciones que dicho plan afrontaba a resultas del estado del sistema político. La decisión de los militares en 1972, al abrir el juego político, apuntaba a conjurar la amenaza derivada del surgimiento en la sociedad civil de fuerzas y conflictos que desbordaban largamente los marcos tradicionales del sistema político. La secuela de motines regionales, el creciente estallido de huelgas salvajes, la propagación de la guerrilla hicieron prevalecer entre los militares al sector que aconsejaba hacerles frente mediante la rehabilitación de la clase política y de sus organizaciones. Pero las instituciones tan súbitamente convocadas a canalizar y disciplinar el combate social llegaban a la cita con sus estructuras maltrechas, con su representatividad en cuestión. Los partidos políticos y las asociaciones profesionales no habían sobrevivido indemnes a la agresión -hecha de prohibiciones y castigos- del orden autoritario impuesto por el presidente Onganía. Ahora que abandonaban su reciente pasividad para sentarse a la mesa de los acuerdos ¿podrían recuperar el monto de poder social que se había acumulado al margen de ellas y permanecía en su periferia, como un residuo político irreductible a la negociación y al compromiso?

Si se suman a estos dos obstáculos las inevitables tensiones encerradas dentro de la heterogénea coalición electoral triunfante, la magnitud de la empresa que el viejo caudillo tenía por delante aparece tan vasta que es posible comprender, retrospectivamente, la expectativa con la que el general Lanusse racionalizó su derrota: dejar que Perón volviera al gobierno para que, como tantos otros antes, también él fracasara y preparara, sobre las ruinas de su ascendiente político, un nuevo retorno de los militares al poder. ¿Cuál fue el papel jugado por el movimiento obrero en la realización de esta profecía?

* Sociólogo argentino actualmente investigador visitante en el St. Antony's College, Londres.

LOS SINDICATOS Y EL PACTO SOCIAL

Cuando el nuevo gobierno asumió el 25 de mayo de 1973 los líderes sindicales estaban lejos de participar del entusiasmo de las huestes peronistas: es que en el desarrollo de la operación política que culminó en el triunfo electoral su participación había sido marginal. En lugar de montar su retorno al poder sobre el movimiento sindical, Perón prefirió hacerlo a partir, de sus viejos cuadros políticos y del apoyo de los sectores juveniles radicalizados incorporados a su movimiento en los últimos años. Al poner distancia frente a la desprestigiada imagen pública de los jefes sindicales, Perón creyó reflejar mejor a la movilización que había hecho posible su reingreso a la vida política argentina. Igualmente supuso, escogiendo a los jóvenes, que éstos serían más dóciles a sus órdenes de lo que lo habían sido los sindicalistas en el pasado. Con lo que se equivocó y trágicamente. Pero si el líder populista falló, como tantos otros, en la evaluación del nuevo fenómeno político-cultural representado por la juventud radicalizada, tenía, en cambio, fundadas razones para comportarse con reticencia ante el liderazgo sindical que durante su exilio había ganado poder y voz propia.

A lo largo de los últimos 18 años, Perón y los jefes sindicales no siempre habían coincidido sobre cómo explotar las oportunidades políticas que una gran masa adicta y la ausencia de un bloque adversario homogéneo colocaban a su alcance. Para los sindicalistas se había tratado de explotarlas con vistas a consolidar sus posiciones en el sistema político y asegurarse el control de los vastos recursos administrados por los sindicatos. Los intereses creados que fueron teniendo con el tiempo, los compromisos a los que debieron apelar para resguardarlos, los llevaron a oponerse, más de una vez, a las consignas que Perón lanzaba desde su exilio. Es que el objetivo central del viejo caudillo durante 18 años fue desestabilizar las fórmulas de gobierno que trabajosamente armaban sus adversarios. Al perseguir al gobierno a través de tácticas que abundaron en marchas y contramarchas, Perón terminaba con frecuencia enfrentado a las aspiraciones más conservadoras de los sindicalistas. Mientras que éstos estaban tras un orden político que legitimara sus posiciones y les permitiera desarrollarse, aún al precio de quebrantar la disciplina peronista, su jefe político se encontraba, por el contrario, dedicado desde la distancia, a una infatigable guerra de desgaste. Para ello no ahorra estímulo a los disconformes ni bendición a los conspiradores, esperando que la búsqueda de una salida política le permitiera imponer, en realidad, a todos, a amigos y enemigos, el peso de su indiscutible ascendiente sobre el electorado.

Cuando ese momento llegó, hacia 1972, y, en consecuencia, la iniciativa política volvió a sus manos, también llegó para Perón la hora de cobrarse las pasadas rebeliones de los jefes sindicales. Quien había ido más lejos en el cuestionamiento de su liderazgo no estaría, sin embargo, para soportar sus desaires: Augusto Vandor había sido asesinado poco antes por los jóvenes simpatizantes recién llegados a su movimiento. Marginando, pues, a los sindicalistas, el veterano caudillo decidió disputar las elecciones apoyado en sus nuevas amistades políticas, llevando a uno de sus fieles cuadros políticos, el Dr. Cámpora, como candidato presidencial. Empero, después de dos meses debió revisar su elección, porque el gobierno de Cámpora, fuertemente influido por el ala radical del peronismo, no se plegó a su plan de desmovilización y conciliación. Al cabo de un breve interinato y de un nuevo llamado electoral, Perón fue consagrado presidente e inició su gestión anudando otra vez su alianza con el movimiento sindical y apartándose, en forma progresiva, de los jóvenes radicalizados.

Estos reajustes políticos sirvieron para incorporar a los jefes sindicales a los círculos gobernantes, pero ello no puso fin a sus tribulaciones. La vuelta del peronismo al gobierno había despertado en los sindicalistas, como en las masas obreras, la expectativa de un aumento general de salarios. El recuerdo de la primera medida tomada por Arturo Frondizi, luego de ser electo presidente en 1958 con el apoyo del voto peronista -un aumento general del 60%-, estuvo sin duda presente en esos cálculos optimistas. Pero la decisión del Ministro de Economía, J. Gelbard, un hombre salido de la burguesía media nacional, fue, en cambio, lanzar una política de ingresos consistente en un incremento salarial del 20%, la suspensión de las negociaciones colectivas por dos años y el congelamiento de los precios de todos los bienes durante un período similar. Todas estas medidas fueron implantadas a través de la firma de lo que habría de llamarse, desde entonces, el Pacto Social, entre la CGT, la confederación empresaria y el Estado. Con la ayuda de Perón, los argentinos venían a conocer, así, los instrumentos de la política de concertación en boga en las socialdemocracias europeas desde fines de la década del cincuenta.

La política de ingresos debió ser una pieza clave, pero complementaria, en un programa económico distribucionista y nacionalista, cuyas líneas principales incluían, además del incremento de la participación de los asalariados en el ingreso nacional, a) el control de las inversiones y remesas del capital extranjero, b) un impuesto a la renta agraria destinado a forzar mayores productividades por parte de los propietarios rurales, c) la estatización parcial del comercio exterior y la apertura hacia los países del Este, d) el estímulo a las exportaciones industriales y la intervención oficial en el sistema bancario. Estas medidas tuvieron una ejecución desigual, y, en conjunto, fueron eclipsadas por la centralidad que adquirió la política de precios y salarios en la gestión económica. A ello contribuyó, en parte, la situación inflacionaria heredada del régimen militar y los efectos de la crisis económica internacional de 1973-74. El otro factor que impidió a las autoridades económicas ir más allá de las urgencias de la política de corto plazo fue que ni los empresarios ni los trabajadores se

sometieron a la disciplina reclamada desde el gobierno: luego de una breve pausa, durante la cual la tasa de inflación disminuyó notablemente, reanudaron la intensa confrontación que venían librando en torno de la distribución del ingreso.

La firma del Pacto Social fue una decisión onerosa y escasamente voluntaria de los jefes sindicales. En realidad, el esquema institucional que esperaban ver concretado por el nuevo gobierno peronista consistía en el mantenimiento de las negociaciones colectivas y la puesta en marcha de una política pro-sindical por parte del Ministerio de Trabajo. Así, hubieran contado con mejores condiciones para recuperar el prestigio perdido durante las forzadas treguas reivindicativas impuestas por el pasado régimen militar. Si en lugar de bregar por este esquema terminaron sumándose a la política concertada fue porque Perón jugó plenamente su autoridad política en favor de ella. La debilidad política que caracterizaba la situación de la cúpula sindical dentro del movimiento peronista hacia 1974 no favorecía una actitud de resistencia. En consecuencia, no tuvieron otra opción que la de correr con los costos de su obligada solidaridad para con su jefe político. De todos modos, ello les reportó beneficios políticos, porque con la firma del Pacto Social, los jefes sindicales se encontraron nuevamente devueltos a los dominios de la ortodoxia peronista, de los que tantas veces se habían alejado en el pasado. En este sistema de transacciones, el freno del poder de presión sindical concedido por los jefes sindicales fue compensado con un aumento de su participación dentro del bloque de fuerzas reunidas alrededor del retorno de Perón. Fueron ellos lo que encabezaron la ofensiva dirigida a suprimir la influencia hasta entonces ejercida por la juventud radicalizada y obtuvieron, por otra parte, que el gobierno aprobara un nuevo estatuto sindical. Por éste se otorgaban a las direcciones oficiales de los sindicatos inmunidades más amplias frente a la ley y recursos más poderosos para sofocar la democracia interna y contener la rebelión anti-burocrática que movilizaba a las bases obreras desde hacía varios años.

Aunque importantes, estos beneficios políticos no terminaban de aliviar los penosos compromisos que les imponía la política concertada de ingresos. Sobre todo, porque la agitación de los trabajadores no se detuvo con la llegada del nuevo gobierno: veinte días después de la asunción de Cámpora había 176 fábricas ocupadas. Si bien el Pacto Social había suspendido las negociaciones colectivas, lo mismo no sucedía con los conflictos laborales que continuaban estallando, ahora en el área del Gran Buenos Aires, después de haber estado confinados durante casi todo el período que va desde el Cordobazo de 1969 a 1972 a las zonas industriales del Interior del país. Debido a la imposibilidad de negociar abiertamente ingresos superiores a los ofrecidos por el gobierno, los trabajadores procuraban obtenerlos de manera indirecta. Para ello recurrían a la reinterpretación de los contratos de trabajo y así fue que comenzaron a cundir los conflictos planteados alrededor de la reclasificación de las tareas, la equiparación de los estatutos, el cálculo de las primas de productividad. Otras cuestiones que mantuvieron en alza la agitación laboral fueron la lucha por la reincorporación de los despedidos por razones políticas y gremiales en el pasado y el reclamo de los salarios atrasados. La temática de las condiciones de trabajo dentro de las empresas continuó, como antes de 1973, siendo una fuente de ásperos enfrentamientos entre la gerencia y los obreros. Esta incesante movilización obrera, que se prolongaba hasta los aparatos sindicales, cuestionando a las direcciones oficiales, dramatizaba más aún las dificultades que afrontaba la CGT dentro del Pacto Social.

Los dirigentes de la CGT se reclutaban entre los cuadros formados en la tradición reivindicacionista del sindicalismo argentino, una tradición centrada en la defensa del nivel de vida obrera y extraña a toda tentativa de intervención más global sobre las modalidades del desarrollo económico. No obstante su efectivo poder de presión en el mercado de trabajo, debido a la inexistencia de las vastas poblaciones marginales tan típicas en los países de América Latina, los sindicatos hablan llevado a cabo sus luchas con independencia de sus eventuales consecuencias sobre la marcha de la economía. Su táctica había consistido en responder a las políticas económicas oficiales, pero sin avanzar, paralelamente, una propuesta opcional de inversiones y consumos. La retórica distribucionista y nacionalista a la que, en su defecto, apelaban los jefes sindicales, mal ocultaba una mentalidad de grupo de presión para la cual, contar con una plataforma sindical elaborada y con los recursos técnicos para fundamentarla, nunca había sido una exigencia prioritaria. Por lo tanto, cuando se puso en funcionamiento la política de ingresos, los dirigentes de la central obrera debieron limitarse a tener una participación formal en los órganos de consulta y gestión creados por el Pacto Social. Esta incapacidad de la CGT para responder a las cuestiones de la gestión económica puestas por el ministro Gelbard en el nivel técnico en el que estaban planteadas no fue más que otra manifestación de la desigual situación en la que se hallaban *vis-a-vis* los empresarios, dentro del marco institucional definido por el Pacto Social.

En efecto, si se analiza la lógica de la política de concertación se advierte de inmediato que, una vez firmados los acuerdos, los sindicatos habían comprometido todo su poder institucional, mientras que los empresarios sólo habían condicionado parcialmente su gestión. Al acordar la suspensión de las negociaciones colectivas por dos años la CGT había obligado a los sindicatos a congelar, por igual lapso, el uso del único poder de control económico que institucionalmente les era reconocido, el de afectar el comportamiento de los salarios. Los empresarios, entre tanto, no habían resignado, sin embargo, el control sobre una serie de variables económicas

cruciales para el desenvolvimiento del plan económico. Ellos contaban, todavía, con la facultad de decidir si habrían de invertir o no, si habrían de incrementar o interrumpir la producción; esto es, contaban con una capacidad de maniobra frente a las disposiciones de la política de ingresos muy superior a la de los sindicatos. Esta asimetría de las limitaciones impuestas por la política concertada a sindicatos y empresarios, respectivamente, tuvo enseguida consecuencias decisivas.

Advertidas del signo distribucionista del futuro gobierno, las empresas incrementaron anticipadamente sus precios, antes de que éste tomara posesión. Ello explicó el acatamiento inicial de los empresarios a la política de ingresos, según quedó reflejado en la caída de la tasa de inflación. Mas los llamados del ministro Gelbard al sector privado para que se sumara a su política económica no fueron escuchados. El nivel de la inversión privada, ya declinante durante 1972, volvió a caer más aún en 1973, indicando el escaso entusiasmo con el que la comunidad empresaria recibió la convocatoria.

Esta retracción de la inversión privada implicaba grandes riesgos, porque el gobierno estaba embarcado en una política fuertemente expansiva. Mientras los empresarios se limitaban a liquidar los *stocks* acumulados y a operar sobre su capacidad productiva instalada, los aumentos salariales y el volumen creciente del gasto público daban un gran impulso a la demanda interna. El desequilibrio que estaba formándose entre la oferta y la demanda presagiaba momentos críticos para el programa estabilizador del ministro Gelbard. El desenlace se precipitó antes, sin embargo, porque hacia fines de 1973 comenzaron a hacerse sentir los efectos de la crisis internacional, vía el aumento de precios de los insumos importados. Dada la vigencia del congelamiento de los precios internos, los mayores costos que la emergencia imponía a los empresarios debían ser absorbidos por los beneficios, a los que éstos respondieron reduciendo o interrumpiendo la producción. El consiguiente desabastecimiento de bienes más la fuerte demanda interna abrieron, así, las puertas a un floreciente mercado negro. El confiado optimismo de los primeros meses, alentado por la espectacular caída de la inflación, dejó paso entonces a una preocupación más a tono con el humor sombrío que iba ganando a los círculos económicos a escala internacional. La vuelta del peronismo a la gestión económica no podía haberse producido en una coyuntura más desfavorable.

El gobierno reaccionó en forma vacilante a las demandas de los empresarios en favor de una flexibilización de los precios. En diciembre de 1973 un apresurado vocero oficial anunció que los mayores costos de los insumos importados podían ser trasladados a los precios. Pero antes de que dicha iniciativa fuera puesta en práctica fue desmentida y sustituida por la creación de un subsidio oficial consistente en un tipo de cambio preferencial para la compra de determinados insumos críticos. Este cambio de línea fue, sobre todo, resultado de la intervención de la CGT, que reclamó ante Perón por una iniciativa que hubiera alterado unilateralmente los precios, sin una modificación paralela del salario. El subsidio oficial no produjo el alivio esperado en el mercado, porque diversas industrias, bajo el pretexto de los mayores costos de los insumos, comenzaron a violar los precios máximos, inclusive en sectores no afectados: así, el gobierno debió, por ejemplo, importar varios productos alimenticios para contrarrestar maniobras especulativas. Dichas maniobras eran particularmente notables en las pequeñas y medianas empresas, menos sujetas a la vigilancia oficial y, por otro lado, más presionadas por los aumentos salariales. Si la central empresaria firmante del Pacto Social se revelaba incapaz de disciplinar a los sectores que constituían su base social por excelencia, tampoco la CGT tenía mejor suerte con respecto a la movilización obrera que seguía agitando las empresas. El éxito de la política de concertación presuponía organizaciones capaces de honrar los acuerdos, pero ni la CGE ni la CGT poseían la representatividad adecuada para ello. Además, el relajamiento de los controles autoritarios vigentes durante el pasado régimen militar devolvió toda su fuerza a la encarnizada puja distributiva que tradicionalmente conmovía a la economía argentina y, frente a ella, nada podían los llamados del gobierno en defensa del Pacto Social.

El Pacto Social había establecido que, al cabo de un año de vigencia, los acuerdos de precios y salarios serían objeto de una revisión para determinar los ajustes necesarios, según hubiera sido la evolución de la tasa de inflación y de la productividad. La fecha prevista era junio de 1974, pero hacia el mes de febrero los jefes sindicales se dirigieron a Perón, señalándole que les resultaba costoso aguardar pasivamente la hora de las negociaciones, mientras las luchas obreras se sucedían en abierta rebeldía, culminando en la mayoría de los casos en mejoras salariales disfrazadas como reclasificación de tareas o nuevos índices en los premios a la producción. A pesar de que las estadísticas oficiales indicaban que la disminución del salario real era todavía pequeña, para los sindicalistas no había tiempo que perder, si es que se quería evitar el incesante desgaste que implicaba la tregua salarial. Perón escuchó sus reclamos y hacia fines de febrero ordenó la convocatoria de la CGT y la CGE para discutir la actualización de los acuerdos establecidos en junio de 1973.

Luego de varias semanas de debates, las partes debieron admitir que el compromiso era imposible y el viejo caudillo fue obligado a interceder entre ellas. El arbitraje fue conocido el 28 de marzo y establecía, por un lado, un aumento salarial de un 5 a un 6% superior al deterioro experimentado por el salario real y, por otro, autorizaba a las empresas a incrementar sus precios en un monto a decidir por el gobierno, previo análisis de la estructura de costos. Aunque los dirigentes de la CGT esperaban un incremento mayor, el laudo fue interpretado

en los ámbitos económicos como una medida favorable a los trabajadores que habría de tener una incidencia negativa en la rentabilidad empresarial. Cuando en abril fueron anunciados los nuevos niveles de precios, fijando un margen de beneficios menor al que pretendían los empresarios, ésta fue la señal para que éstos se lanzaran a una sistemática y generalizada violación de los acuerdos del Pacto Social. La inflación, que en febrero y marzo había oscilado entre el 1,6% y el 1,2% mensual, trepó al 2,8% en abril, al 3,3% en mayo y al 3,8% en junio, arrastrando consigo los restos del esquema económico que el ministro Gelbard había articulado sobre la autoridad del presidente.

2. LA MUERTE DE PERÓN

En la reconstrucción de las vicisitudes del último gobierno peronista, la desaparición del viejo caudillo constituye un hito decisivo. Mientras estuvo al frente del gobierno, las tensiones sociales y políticas que heredó y aquellas otras que, con su política, contribuyó a generar, no lograron invadir totalmente la escena política: en el centro de ella estaba él, insuflando todavía un mínimo de credibilidad al retorno del peronismo al gobierno. Que esa función era personalmente costosa lo puso de manifiesto su última y patética aparición pública, un mes antes de su muerte. El 12 de junio de 1974, Perón salió al escenario de sus pasados triunfos, los balcones de la Casa Rosada, y desde allí amenazó a la multitud, apresuradamente reunida, con abandonar la presidencia si persistía el sabotaje y el cuestionamiento a su gestión de gobierno. La magnitud de su reacción sorprendió a todos. La aceleración de los conflictos sociales y políticos durante los últimos meses había sido, sin embargo, de tal intensidad, que el veterano líder populista no vaciló en recurrir a su presencia carismática para recuperar la iniciativa sobre un proceso político cada vez más ingobernable.

Durante los festejos tradicionales del último 1 de Mayo el conflicto entre la juventud radicalizada y el jefe peronista había culminado en forma espectacular. La ruptura, inevitable, se había ido preparando desde principios de año, cuando las exhortaciones iniciales de Perón a la moderación fueron seguidas por una drástica ofensiva que no ahorró violencia ni dejó dudas sobre la incompatibilidad existente entre las dos vertientes que confluyeron en el retorno del peronismo al gobierno: la que venía a la cabeza de la ola de movilizaciones previas a 1973 y apuntaba a la quiebra del orden político en nombre de un militante populismo revolucionario y la que respondía a las consignas distribucionistas y nacionalistas del peronismo histórico.

Sobre el fondo de ese enfrentamiento, cuya dureza aumentaba en proporción directa a la mayor gravitación que iban ganando los partidarios de la violencia de uno y otro bando, los conflictos laborales continuaban con redoblada intensidad. Entre marzo y junio, esto es, los dos meses previos a la muerte de Perón, se registró el promedio mensual de conflictos más alto de los tres años de gobierno peronista. El porcentaje mayor correspondió a los que perseguían aumentos salariales. Desencadenadas al margen de los acuerdos resultantes de la reciente negociación del Pacto Social, las luchas salariales en las empresas permitieron obtener incrementos sustancialmente superiores a los ya elevados conseguidos por la CGT. El éxito de los conflictos estuvo, en gran parte, asegurado por los cambios operados en la actitud de los empresarios ante la política concertada. El laudo del 28 de marzo había debilitado su ya flaqueante voluntad de compromiso con los objetivos económicos del ministro Gelbard. En consecuencia, en lugar de resistir las reivindicaciones salariales, muchos optaron por avenirse a ellas, para trasladarlas de inmediato a los precios, sin esperar la autorización gubernamental. De este modo, las mejoras salariales terminaban siendo tan efímeras como rápido había sido el trámite para obtenerlas. No obstante ello y sin amedrentarse frente a los peligros de la ilusión monetaria, los trabajadores continuaban con su movilización incesante.

Alarmada por el hecho de que no se hiciese oír ninguna voz oficial advirtiendo que el Pacto Social había pasado a ser letra muerta, una delegación de la CGT entrevistó a Perón en los primeros días de junio, para extraer de él alguna reacción que aliviara la presión que estaban soportando. El perentorio llamado de los jefes sindicales tuvo la virtud de poner en evidencia la considerable brecha abierta entre el discurso oficial y la realidad inmediata. Hacía sólo un mes que Perón, celebrando el primer año de gestión peronista, había presentado ante el parlamento sus ideas sobre el futuro modelo político para la Argentina. Empero, la pretensión de legar a los argentinos un nuevo orden no se compadecía con las vicisitudes por las que atravesaba el orden inaugurado apenas un año atrás. Un sector importante de la juventud había renunciado a formar parte de él, persiguiendo otro más congruente con el que el viejo caudillo les había prometido desde su exilio en Madrid. Los mecanismos de concertación sobre los que estaba montado el Pacto Social ya no conciliaban conflicto social alguno. La confrontación entre capital y trabajo se había replegado al ámbito de las empresas, dejando a la CGT y a la CGE entregadas a una fatigante negociación cuyos resultados eran violados sistemáticamente. Mientras el ministro Gelbard se encontraba viajando por los países del Este y de América Latina a la búsqueda de nuevos mercados, a sus espaldas se autorizaban aumentos de salarios y se transgredían los precios máximos.

El pedido de auxilio lanzado por los jefes sindicales fue escuchado y Perón, el 12 de junio, procuró colmar con su autoridad política el creciente vacío que rodeaba a su proyecto de gobierno. Pero no viviría para recoger los

presuntos frutos políticos de su iniciativa, ya que murió poco después, el 1 de julio. Para entonces, sus objetivos de reconciliación política y colaboración social habían experimentado un sensible retroceso. Con su desaparición, surgieron fundadas dudas de que sus sucesores en el gobierno los concretaran. No sólo porque las virtudes carismáticas del veterano líder eran difícilmente transferibles. Principalmente, porque ni la presidente Isabel y su *entourage*, ni los jefes sindicales -los dos grupos influyentes en el nuevo esquema de poder- se propusieron prolongar los objetivos que habían guiado el retorno de Perón.

Perón había sido consciente de que una mayoría electoral tan vasta como el 62% obtenida en las elecciones de 1973 no era, sin embargo, base suficiente para el ejercicio del poder en un país cuya vida política reciente estaba pautada por las intervenciones militares y las proscripciones electorales. Un gobierno peronista replegado sobre sus propias fuerzas debía ser, a mediano plazo, un gobierno vulnerable a la presión de la poderosa oposición que, aunque derrotada políticamente, velaba sus armas en las trincheras de los grandes negocios y las jerarquías militares. Para limitar los previsibles riesgos del aislamiento político, el líder peronista optó, pues, por un régimen político articulado sobre una red de acuerdos, como los que animaban la convergencia con el Partido Radical en el parlamento y el Pacto Social entre los empresarios y los sindicatos. Hacia junio de 1974, dicho régimen político había experimentado un acentuado deterioro; restaba, no obstante, todavía vigente la voluntad aliancista del viejo caudillo. Luego de su muerte, fue, precisamente, esa voluntad la que comenzó a faltar en los círculos gobernantes. Más inspirados por la intolerancia y el sectarismo a los que se habían acostumbrado durante 18 años de semi-legalidad política que por el programa de conciliación de Perón, sus sucesores se dedicaron a dismantelar, prolijamente, los acuerdos heredados y a proclamar llegada la hora de la exaltación del peronismo.

El primer movimiento en la dirección de este nuevo diseño político, que modificaría en pocos meses la faz del régimen, se produjo dentro de la cúpula sindical. El fin del mandato de la comisión directiva de la CGT suministró la ocasión para que se dirimieran las querellas acumuladas entre los sindicalistas que sostenían que los sindicatos eran una rama más del movimiento gobernante y que a su dirección política debían someterse y aquellos otros que, por el contrario, los concebían como un grupo de presión independiente. Argumentando que los gobiernos pasan mientras que los sindicatos quedan, los partidarios del sindicalismo de presión proponían que el movimiento obrero entrara en la nueva etapa política que se abría libre de compromisos y de gravosas lealtades. Su propuesta encontró eco inmediato entre los quejosos jefes sindicales, malhumorados por la experiencia del Pacto Social, y, bajo la dirección del líder metalúrgico Lorenzo Miguel, derrotaron los intentos continuistas de la conducción saliente, demasiado asociada con los pesados costos de un año de tregua reivindicatoria.

Poco después le tocó el turno al ministro Gelbard, representante por antonomasia en el gabinete de la política de alianzas de Perón. Concluido el precario armisticio que siguió a la muerte del viejo caudillo, en el mes de septiembre un cúmulo de presiones cruzadas se descargó sobre el jefe de la conducción económica. El presidente del Banco Central renunció a su cargo en disidencia con la descontrolada política de emisión monetaria y gasto público que mantenía en marcha una economía sin inversión privada. El Partido Radical abandonó su benevolente apoyo para reclamar, en nombre de su clientela política, un reajuste de la tasa de beneficios. Finalmente, la CGT, deseosa de traducir en hechos su recobrada independencia corporativa, solicitó una nueva renegociación del Pacto Social. Cuando el 17 de octubre la presidente Isabel accedió a esta demanda, el ministro Gelbard se alejó del gobierno. Su soledad política había quedado patéticamente al descubierto poco tiempo antes, cuando, atacado desde todos los flancos por su proyecto de ley agraria, la central obrera optó por tomar distancia y declaró en forma pública su neutralidad en la controversia.

Los acuerdos partidarios articulados por Perón no tuvieron mejor suerte. La presidente Isabel procedió a una reorganización del gobierno, por un lado, sustituyendo a los representantes de los partidos no-peronistas integrantes del frente electoral por hombres de su círculo íntimo y, por otro, desplazando al Partido Radical de toda injerencia en la adopción de decisiones de política general. Mientras esta operación de homogeneización política tenía lugar en las alturas del poder, otro frente ocupó la preocupación de los sucesores de Perón: las actividades de la oposición sindical.

La aprobación de la Ley de Seguridad por el parlamento suministró al Ministerio de Trabajo un oportuno arsenal de instrumentos para sofocar las huelgas ilegales. A partir de julio, el número de conflictos laborales cayó considerablemente; si hasta junio se habían registrado alrededor de 30 conflictos por mes, de julio a noviembre el promedio bajó a 22,5 y de noviembre a marzo de 1975 disminuyó a 11,6. Bajo la amenaza de las nuevas disposiciones legales, las ocupaciones de fábricas prácticamente desaparecieron después de agosto. La ofensiva oficial fue intensa, sobre todo, contra quienes aparecían como los portavoces visibles de la oposición sindical, los sindicatos de mecánicos y electricistas de Córdoba, conducidos por René Salamanca y Agustín Tosco, respectivamente, y el jefe del gremio gráfico de Buenos Aires, Raimundo Ongaro. Estos hombres, surgidos al primer plano durante las luchas obreras de 1968 a 1972, eran el polo de atracción de la dispersa y heterogénea red de militantes disidentes generada en las movilizaciones a nivel de las empresas. Entre los meses de agosto a

octubre fueron cayendo, uno tras otro, sus sindicatos intervenidos, ellos detenidos u obligados a la clandestinidad, sus contactos anulados. La operación destinada a pacificar el ambiente laboral tuvo, sin embargo, una conclusión inesperada, porque una ola de ausentismo cundió en noviembre y diciembre. El fenómeno, rápidamente destacado en la prensa, fue interpretado en el marco del nuevo clima político: dada la vigencia de la Ley de Seguridad, por un lado, y la aprobación por el parlamento de la Ley de Contrato del Trabajo, preparada por la CGT, que reforzaba la estabilidad del empleo dificultando los despidos, el ausentismo se convirtió en un canal opcional de expresión del descontento obrero.

Así, en sólo unos meses, la escena política fue drásticamente recompuesta y, al final, dejó frente a frente al grupo que rodeaba a la presidente Isabel y a los jefes sindicales: fue en torno de las aspiraciones rivales de estos dos sectores aspirantes a la sucesión de Perón que se libró la última confrontación que llevaría a la desintegración del peronismo en el gobierno.

3. LA CRISIS POLÍTICA

Visto desde la perspectiva de los jefes sindicales, el año que concluía se cerraba con un balance positivo. Las tribulaciones de los primeros meses, en los cuales la cúpula sindical debió batirse en retirada, asediada por las huelgas salvajes y las rebeliones anti-burocráticas, habían quedado atrás. La eliminación de la oposición sindical despejó el camino para la normalización de las organizaciones obreras y hacia fines de 1974 una serie de elecciones y asambleas confirmó a los principales jefes sindicales en el control de la extensa estructura sindical. La enojosa situación de tener que negociar con un ministro de economía ajeno al movimiento peronista también había sido superada. Por otra parte, la arremetida sindical contra los gobernadores electos en 1973 con el apoyo de la izquierda peronista había culminado con éxito: Bidegain, en Buenos Aires, Obregón Cano, en Córdoba; Ragone en Salta, Cepernic en Chubut, Martínez Baca en Mendoza fueron siendo desplazados a lo largo del año y un hombre del sindicalismo, el metalúrgico V. Calabró nombrado gobernador de Buenos Aires, la provincia económicamente más importante del país. El avance político de los líderes sindicales parecía incontenible. Quienes seguían la progresiva consolidación de la influencia sindical predecían que en la próxima renovación de las autoridades parlamentarias la presidencia del Senado podría ir a sus manos, lo cual implicaba que la segunda jerarquía en el ordenamiento institucional sería ocupada por un parlamentario de origen sindical.

Este promisorio futuro sindical mal se compaginaba, sin embargo, con la presencia de la viuda de Perón y su *entourage* en el gobierno. Durante la última etapa de su carrera política, el viejo caudillo había hecho posible el encumbramiento de su mujer y de su secretario privado, López Rega, y, a su muerte, éstos quedaron con el control de posiciones claves en el movimiento y la presidencia. Sólo la formidable concentración de poder político por parte de Perón a su regreso a la Argentina permitía entender el lugar que habían llegado a ocupar, careciendo, como carecían, de antecedentes en el peronismo y de conexiones en el mundo político. Invocando el nombre de Perón primero, reverenciando su memoria después, fueron construyendo un círculo privado de poder en el aparato del Estado y desde allí desafiaron a las ambiciones políticas de los jefes del movimiento sindical. Varios incidentes anticiparon el conflicto que los enfrentó a mediados de 1975. El primero de ellos ocurrió en los funerales del viejo caudillo, de cuya organización fue ostensiblemente excluida la CGT. Luego, cuando los restos de Evita fueron traídos al país en noviembre, los líderes sindicales se enteraron tardíamente de la sigilosa operación. Además, desde que fuera designado ministro de bienestar social, López Rega complotó tenazmente para sustraer a los sindicatos su compleja red de obras sociales y colocarla bajo su control. Sólo la intervención de Perón, mientras vivió, frustró ese plan que amenazaba en forma tan directa las bases del poder económico y de patronazgo de los jefes del sindicalismo.

Frente a las señales premonitorias de la crisis, los líderes sindicales multiplicaron sus manifestaciones de adhesión, procurando alguna forma de acomodación que garantizara uno de sus objetivos políticamente más urgentes: la convocatoria de las negociaciones colectivas. Tal como fuera estipulado en el acta del Pacto Social de junio de 1973 y ratificado por Perón en su laudo del 28 de marzo de 1974, la negociación directa entre empresarios y sindicatos debía reanudarse al final de la tregua de dos años, en junio de 1975. Para quienes habían debido contemplar pasivamente los recientes conflictos laborales, la necesidad de revalidar su liderazgo en las comisiones paritarias era, indudablemente, imperiosa. Mas, la voluntad de entendimiento puesta de manifiesto por los jefes sindicales fue cada vez menos correspondida por el grupo reunido alrededor de la presidente. Si al retomar el poder, Perón había sabido dejar de lado sus pasadas diferencias con la cúpula sindical, para su mujer y para López Rega, testigos silenciosos de esas conflictivas relaciones durante el largo exilio, aquellas no estaban olvidadas y eran motivo de un resentimiento profundo.

Por otro lado, la propia subsistencia de su gobierno imponía un severo recorte a la influencia sindical. La manipulación de los símbolos peronistas había servido para afianzar la imagen presidencial dentro de la masa popular después de la muerte de Perón. El paso siguiente en esta tarea de consolidación debía ser disminuir la indisimulada hostilidad del mundo de los grandes negocios y de las jerarquías militares. La preocupación por

ganar, si no la confianza, por lo menos la neutralidad de los sectores en los que, según su visión de la inestable historia política del país, residían las garantías últimas de la permanencia en el gobierno, fue una obsesión que nunca abandonó a la presidente Isabel y a sus asesores. De allí que se pusieran a la tarea de acabar con la incómoda asociación que los ligaba a los jefes sindicales para acometer, libre de terceros, su diálogo institucional con los factores reales de poder.

Con el grupo presidencial absorbido en sus arcanas manipulaciones palaciegas, tan audaces que llegaron a incluir la pretensión de cooptar una fracción del ejército, la situación económica que serviría de marco a las futuras negociaciones colectivas, marchaba a la deriva. A pesar del optimismo con el que el ministro Gelbard proclamara, al dejar el gobierno, que el crecimiento del producto llegaría al 7% en 1974 y que el nivel de desempleo se mantendría en el irrisorio 2,5% del mes de noviembre, las perspectivas inmediatas tenían otro signo. En julio, el Mercado Común Europeo había prohibido la importación de carnes argentinas, originando una drástica caída tanto en el volumen como en el valor de las exportaciones. Entre tanto el precio de insumos importados continuó en alza. El gobierno, temeroso de los efectos que podría tener sobre distribución del ingreso y las expectativas inflacionarias, no respondió a la nueva coyuntura reajustando el tipo de cambio. Siguió a ello un formidable incremento de las importaciones: éste se compuso, en primer lugar, por las demandas de insumos resultantes del sostenido ritmo de la actividad económica y, en segundo lugar, por las compras especulativas ordenadas por los empresarios, en previsión de una futura devaluación de la moneda. El resultado de estos opuestos movimientos de la balanza externa fue que el *surplus* de 704 millones de dólares acumulados en 1973 se revirtió en un déficit de 286 millones en la segunda mitad de 1974, haciendo aparecer en el horizonte el perfil familiar de la crisis de pagos. La compatibilización entre economía "recalentada" por la casi plena ocupación, la fuerte emisión monetaria y las expectativas inflacionarias, por un lado, y la situación externa crecientemente desfavorable, por otro, pasó a ser la tarea prioritaria del reemplazante de Gelbard, el ministro Gómez Morales.

El nuevo ministro, un hombre del viejo peronismo político, ensayó la puesta en práctica de una serie de medidas que apuntaban a la compresión del gasto público y a la creación de moneda, al mejoramiento de la rentabilidad mediante un paulatino reajuste de precios, procurando atraer al capital extranjero para compensar, así, la planeada reducción de la inversión pública. Esta orientación económica, que dejaba de lado toda otra preocupación que no, fuera resolver los problemas de la coyuntura, fue planteada como una táctica de intervención gradual y, en lo posible, solidaria con los acuerdos que habían inspirado al Pacto Social. La dificultad que trabó al ministro Gómez Morales fue que su nombramiento había tenido lugar durante el período de recomposición del gobierno y él mismo estaba asociado más con un tributo simbólico a la memoria de Perón que con las ambiciones de poder del nuevo núcleo gobernante. Así fue que, a lo largo de los 241 días que duró su gestión, el ministro Gómez Morales esperó en vano el aval de la presidente Isabel para lanzar su plan económico, mientras se ocupaba de cuestiones menores y observaba, impotente, el avance del deterioro económico.

En este clima de indefinición se produjo el llamado a las negociaciones colectivas, que comenzaron a reunirse a fines de febrero de 1975 con el mandato de firmar los nuevos contratos de trabajo el 1 de junio. Los sindicalistas habían esperado ansiosamente este momento para colocarse por fin a la cabeza del descontento obrero. La inflación crecía ya entonces a un ritmo acelerado, moviéndose al 26% el incremento del costo de vida entre noviembre de 1974 y febrero de 1975, de tal modo que cada reajuste salarial duraba menos que el anterior. Diez meses habían pasado antes de la primera modificación del Pacto Social, hecha en marzo de 1974; ésta, a su turno, sobrevivió siete meses; el reajuste otorgado en noviembre, un 15%, apenas tuvo vigencia cuatro meses. La nueva orientación de Gómez Morales, estableciendo que los aumentos salariales podían ser trasladados a los precios, reponía una y otra vez la necesidad de nuevos reajustes y en marzo, no obstante la apertura de las negociaciones salariales, debió otorgarse otro aumento de emergencia próximo al 20%. En este marco los conflictos laborales comenzaron en forma progresiva a agitar las empresas, ejerciendo presión en favor de los nuevos contratos.

Sin embargo, a los pocos días de reunirse, las comisiones paritarias de empresarios y sindicatos entraron en un forzado receso porque carecían de una opinión oficial autorizada acerca de los planes económicos del gobierno. Convocadas en nombre de la libertad de contratación, las negociaciones colectivas no podían ignorar los parámetros fijados por la intervención del Estado: para conocerlos, los líderes sindicales solicitaron una entrevista a la presidente a fines de febrero, pero dicho pedido no tuvo una respuesta inmediata. Mientras el desorden económico cundía, los voceros del gobierno continuaban insistiendo en la necesidad de comprimir la demanda y aumentar la productividad. Estas exhortaciones, inspiradas en la filosofía del nuevo ministro de economía, habían precedido demasiadas veces en el pasado el lanzamiento de políticas económicas anti-laborales para que los jefes sindicales las escucharan sin inquietarse. Pero no solamente asistían al despliegue de una orientación económica cuyos efectos tenían alguna razón para temer, en particular, a la vista de las frecuentes críticas que se descargaban contra su tan apreciada Ley de Contrato de Trabajo, acusándola de poner obstáculos a la eficiencia industrial. Al mismo tiempo, los canales de acceso a la presidencia parecían estar bloqueados. A pesar de su hermetismo frente a las preguntas cada vez más insistentes de los periodistas, de sus

declaraciones de adhesión a la viuda de Perón, era evidente que su confiado optimismo de fines de 1974 estaba siendo sustituido por una insostenible sensación de aislamiento. Cuando a fines de abril la esperada entrevista con la presidente se produjo, ésta no despejó las incertidumbres, y los sindicalistas debieron retornar a las comisiones paritarias para enfrentar a unos empresarios decididos a ignorar sus reivindicaciones hasta no conocer el pensamiento oficial en materia de precios, salarios y tasa de cambio.

Al llegar el 31 de mayo, la fecha prevista para concluir las negociaciones, sin haberse arribado a decisión alguna, la protesta obrera desbordó los controles sindicales y comenzaron a proliferar las manifestaciones callejeras y las ocupaciones de fábricas. Este fue el momento en el que el grupo presidencial abandonó su calculada inactividad, aceptó la renuncia de Gómez Morales y nombró en su reemplazo a uno de los suyos, Celestino Rodrigo. Tres días después de asumir, el nuevo ministro comunicó sus primeras decisiones: devaluación de la tasa de cambio en un 100%, incremento del precio de los combustibles en 175%, de la electricidad en 75% y de otros servicios públicos en proporciones similares. Esta drástica definición económica provocó estupor y alarma entre los sindicalistas. Aunque la dirección de las medidas tomadas era esperada por la prensa, la intensidad de las mismas, el carácter súbito e inconsulto de su anuncio parecían destinados a colocarlos en aprietos: sus sospechas se corroboraron cuando empezó a circular el rumor de que sería intención oficial cancelar las negociaciones colectivas, otorgar un aumento general del 50% por decreto y defenestrar a los principales jefes sindicales no bien opusieran resistencia.

Durante las semanas siguientes la confusión fue total. Los directivos de la CGT se reunieron repetidas veces con el ministro Rodrigo en un vano esfuerzo por conocer sus propósitos últimos, para escuchar una y otra vez por parte de éste que las negociaciones colectivas eran libres pero que el gobierno esperaba de las partes una actitud responsable. Después de la violenta recomposición del cuadro económico, este llamado a la moderación mal podía ser secundado, sobre todo, por quienes se veían llevados a una confrontación en la que no sólo estaba en juego la cuestión salarial sino también su propia supervivencia. Bajo la presión de una movilización obrera que ya no controlaban, los líderes sindicales volvieron a sentarse con los empresarios en torno de los 1.400 contratos en disputa y en pocos días, ya sobre el fin de un nuevo plazo para su firma, acordaron las futuras tarifas salariales. Coincidiendo con la difusión de estadísticas oficiales que revelaban que las reservas externas habían descendido a un nivel que ponía en peligro la financiación de un mes de importaciones, la prensa comunicó los nuevos acuerdos: variando desde un 60/80 % hasta más de un 200%, los incrementos se situaban alrededor de un promedio del 160%. La magnitud de estos aumentos salariales demostró que los jefes sindicales eran capaces de producir resultados similares a los que hubieran aspirado los representantes más militantes de la oposición sindical. Sin duda alguna, los empresarios tuvieron su parte en esta singular proeza. Es verdad que habían recibido del ministro de economía seguridades con respecto a una próxima liberación de precios. Pero en la facilidad con que se allanaron a las demandas sindicales es difícil no ver la intención de crear dificultades a un gobierno con el que escasamente se identificaban.

Frente a la réplica sindical, la presidente resolvió el 27 de junio anular los convenios negociados y dispuso un aumento del 50% a pagarse en forma uniforme. El anuncio de la presidente provocó la inmediata paralización del trabajo en los principales centros del país y colocó a los líderes sindicales ante un dilema que habían procurado tenazmente evitar. De seguir adelante con el desafío que les planteaba el grupo presidencial se corría el riesgo de precipitar la caída del gobierno peronista. Pero aceptar la propuesta oficial implicaba comprometer su liderazgo sindical. No sólo porque ello habría de reabrir peligrosamente la brecha con sus bases obreras. También, porque si resignaban sus posiciones, su lugar en el esquema de poder que emergiera del conflicto estaría seriamente recortado. En la concepción autoritaria del poder que anima al grupo presidencial no había espacio previsto para la colaboración con el movimiento sindical. Durante el año que duró la presidencia de Perón, los sindicalistas habían gozado de un acceso fluido a las decisiones gubernamentales. Siendo copartícipes del funcionamiento del régimen político, los líderes sindicales pudieron, como lo hicieron, denunciar e incluso sofocar los movimientos de protesta que partían de las bases. Mas, ahora, ante la amenaza de un reforzamiento de su aislamiento político, ¿qué otra alternativa tenían sino colocarse a la cabeza de la movilización obrera y recuperar, de ese modo, su liderazgo sindical?

El *impasse* se prolongó a lo largo de una semana, durante la cual el país estuvo paralizado: los jefes sindicales, indecisos, ante la gravedad de las medidas a tomar, el grupo presidencial, obstinado, sin dejar espacio alguno para el compromiso. Las posibilidades de un triunfo gubernamental dependían de que prevaleciera la opinión de los pocos que aconsejaban la rendición sindical en nombre de la disciplina peronista. Los sondeos para detectar la disposición de los militares para reprimir no arrojaron resultados positivos. No obstante el signo conservador de su política económica, de la resolución con la que se disponían a enfrentar la rebelión sindical, el grupo presidencial estaba lejos de inspirar la confianza de las jerarquías militares. De modo que cuando la CGT salió de su indecisión y ordenó un paro de 48 horas para el 7 de julio -refrendando el estado de huelga existente- el conflicto tenía un sólo desenlace posible. Al día siguiente, el gobierno aprobó los contratos en litigio y en las semanas sucesivas, el ministro Rodrigo y López Rega presentaron sus renuncias. La crisis política concluyó, así,

con la victoria de los líderes sindicales, quienes, completando la secuencia de equívocos que había servido de marco al conflicto, volvieron a renovar su solidaridad con la presidente, una vez frustrada la operación mediante la que ésta pretendió suprimir su influencia en el gobierno.

4. LA LARGA AGONÍA

Luego de la dramática experiencia por la que había pasado, el movimiento peronista en el poder ya no volvería a reponer su credibilidad. Sobreviviría ocho meses más, durante los cuales la perspectiva de un golpe militar acompañaría cada uno de sus pasos, amplificando los efectos de su falta de autoridad gubernamental y de sus tensiones políticas internas. En el corto lapso de sus dos años al frente del gobierno, el peronismo buscaba todavía un rumbo, sin encontrar respuestas a su crisis de identidad.

Por sus líderes, por sus programas, el peronismo se había desarrollado desde los años cuarenta como una fuerza política reformista. Durante la primera presidencia de Perón sus consignas distribucionistas y nacionalistas tuvieron una función de ruptura en la sociedad argentina de la época. En los años que siguieron a 1955, ellas galvanizaron la resistencia de la masa popular peronista a las tentativas de restauración conservadora. Más tarde, cuando sus divididos adversarios se convencieron de que no existía gobierno viable sin su respaldo o su tolerancia, dichas consignas acompañaron su reingreso a ese complejo e inestable sistema de transacciones políticas que dominó la arena pública desde 1958. A partir de entonces, su acomodación a las reglas de juego del orden político surgido de su derrocamiento fue incesante. Tanto, que la izquierda cifraba las esperanzas de una renovación política en la quiebra de la fidelidad que unía las masas con un liderazgo que defendía su status político presentándose como el verdadero freno al avance del comunismo. Pero este peronismo que, naturalmente, elevaba a sus rangos dirigentes a burócratas sindicales y políticos reformistas y condenaba a una oscura marginalidad a sus escasos sectores radicalizados era un movimiento que tenía una congénita fuente de heteronomía: su dependencia con respecto a Perón. El liderazgo del viejo caudillo estuvo revestido de un valor carismático; en consecuencia, lo que hiciera o dijera, su bendición o anatema, tenían un significado crucial para sus seguidores y eran, potencialmente, un elemento de inestabilidad sobre la dinámica interna del movimiento peronista mismo.

Durante su largo exilio, Perón jugó un papel relativamente pasivo dentro del movimiento. Obligado a actuar a la distancia, sus instrucciones fueron, casi siempre, generales y flexibles, de tal modo que el lugar de la ortodoxia permaneció siempre indefinido, permitiendo a los líderes locales conjugar sus vaivenes tácticos con la reiterada afirmación de su lealtad peronista. Cuando su intervención fue más positiva, se limitó a secundar aquellas políticas que parecían reflejar mejor el humor político de las masas. Fue un cálculo de esta naturaleza el que lo llevó a acoger en su movimiento a la nueva izquierda surgida de las luchas sociales de fines de los sesenta. Como era previsible, esta iniciativa desató una profunda crisis de identidad dentro del peronismo. Los recién llegados hablaban un nuevo lenguaje, cuestionaban los liderazgos establecidos, y todo ello bajo la benévola aprobación del viejo caudillo. Este fue un período particularmente crítico para los jefes sindicales. El clima de tolerancia en el que habían crecido dejó paso a una campaña moralizadora que prometía extirpar con fuego las miserias y debilidades con las que habían convivido durante tanto tiempo. El pragmatismo que garantizó su desarrollo bajo las adversas condiciones políticas posteriores a 1955 fue condenado en nombre de la intransigencia revolucionaria. Por fortuna para los líderes sindicales, no estaba en el proyecto de Perón lanzar una revolución cultural para regenerar al peronismo. Una vez en el poder, rompió con la izquierda juvenil y repuso los valores tradicionales de la ortodoxia. La paz retornó, así, a las filas sindicales, mientras que los jóvenes protagonistas de esta operación de manipulación ideológica aceleraron su radicalización, empujados por la desilusión que marcó su debut en la vida política.

La intervención de Perón estuvo también presente en la nueva crisis de identidad que convulsionó al movimiento peronista en 1975. En efecto, el lugar preeminente que el viejo caudillo asignó antes de su muerte al grupo presidencial abrió la vida para otro intento revisionista, esta vez, desde posiciones de derecha. Por las circunstancias en que tuvo lugar, la reconversión del movimiento peronista auspiciada por la presidente Isabel y López Rega se pareció bastante al giro político de Arturo Frondizi en 1958, cuando, después de una prolongada militancia nacionalista, comenzó a abogar desde el gobierno por la cooperación con los capitales extranjeros. El desprejuiciado realismo económico predicado por el ministro Rodrigo y su paralela apertura hacia el mundo de los grandes negocios no podían sino conmover profundamente las tradiciones reformistas y populares del peronismo. Si a esta revisión ideológica se agrega la reorganización autoritaria del poder perseguida por el grupo presidencial, se comprende que los líderes sindicales y los viejos cuadros políticos se movilizaran en junio de 1975 para poner a salvo lo que ellos entendían como la identidad histórica del peronismo.

Concluida la crisis política con la renuncia de sus colaboradores más cercanos, la presidente se alejó temporariamente de sus funciones en uso de licencia y una coalición de sindicalistas y políticos se hizo cargo del gobierno en agosto. La nueva entente no lograría, empero, devolver al Estado la autoridad que había perdido; a

su vez, la política del nuevo ministro de economía, A. Cafiero, tampoco dejó dudas sobre cuán limitadas eran las alternativas todavía abiertas. Su táctica consistió en hacer frente a la vertiginosa espiral inflacionaria -que creció al 34,9% en julio y al 23,8% en agosto- mediante una indexación general y gradual de los salarios, los precios y la tasa de cambio. Este recurso tuvo la virtud de evitar tensiones mayores pero implicó, al mismo tiempo, la cándida confesión de que era imposible controlar la puja entre las fuerzas económico-sociales. La reciente experiencia de C. Rodrigo aconsejaba que era más prudente someterse a la dinámica propia del proceso inflacionario, para introducir, desde dentro, ajustes y correcciones que sirvieran, si no para torcer su rumbo, por lo menos para postergar en lo posible un desenlace catastrófico. Mas, tanta sagacidad por parte del ministro de economía no pudo impedir que se produjeran rezagos y distorsiones en el comportamiento de los precios relativos y ello condujo al rápido florecimiento de un extraordinario clima especulativo. Frente a la continua depreciación del valor de los bienes y de los activos, los agentes económicos encontraron más rentable entregarse a una febril manipulación de las diferencias entre el dólar oficial y el dólar negro, entre el interés de los títulos públicos y la tasa de inflación. La vorágine especulativa, dominada por las maniobras de las grandes empresas, arrastró a los pequeños ahorristas e, incluso, a sectores obreros, y fueron vanos los esfuerzos del ministro Cafiero por detenerla. Los ajustes de los precios, las periódicas correcciones de la paridad oficial del dólar y las compensaciones salariales no tuvieron otros efectos que los de potenciar el ritmo con el que crecía la inflación.

Las oscilaciones de los precios relativos, a la vez que alimentaban la fiebre especulativa contribuían a exacerbar las luchas intersectoriales y éstas, a su turno, cerrando el círculo dentro del que se debatía impotente la conducción económica, aceleraban las expectativas inflacionarias. Asimismo, paralelamente a la lucha entre los grandes grupos de ingreso, los asalariados y los empresarios, la presión en el seno de cada uno de ellos no era menos enconada. Los diferentes sub-grupos procuraban defender sus posiciones relativas, generalmente, con independencia del mejoramiento global de la categoría a la que pertenecían. Esto fue visible, sobre todo, entre los sindicatos y, en parte, fue resultado de las distorsiones de la estructura salarial provocadas por el tumultoso trámite de la firma de los nuevos contratos. Como se mencionó antes, los incrementos salariales obtenidos en junio variaron entre el 60 y el 200%, siendo los más bajos los que se acordaron primero, mientras que los últimos fueron favorecidos por la abierta rebelión sindical contra las pautas oficiales. Aquellos que quedaron rezagados se agolparon enseguida en las oficinas del ministro de economía solicitando una reconsideración de su situación. Luego estaban otros que avanzaban su caso invocando el deterioro experimentado por los diferenciales inter-sindicales; así, el sindicato de la industria del automóvil, cuyos salarios se habían incrementado en un 100%, reclamó por el estrechamiento de la tradicional brecha que lo separaba del sindicato metalúrgico, beneficiario de un aumento del 160% en el mes de junio. A la avalancha de pedidos de excepción, los que habían sido más favorecidos oponían los suyos, insistiendo en que toda concesión especial otorgada a cualquier grupo debía ser extensiva al resto, obligando con ello a las autoridades económicas a una gimnasia aritmética que hacía prácticamente imposible la formulación de una política de salarios.

Bien pronto, sin embargo, una nueva preocupación ganó a los líderes sindicales. Luego del *shock* provocado por C. Rodrigo, la economía se movió súbitamente de la situación "recalentada" de abril, con fuertes presiones del lado de la demanda y bajas tasas de desempleo, a otra próxima a la recesión en julio y agosto. El desempleo se elevó de 2,3 al 6% en Buenos Aires y trepó al 7% en áreas como Córdoba, donde la industria automovilística fue severamente afectada. La caída de la producción industrial en un 5,6% en el tercer cuarto del año -que sería seguida de un nuevo descenso del 8,9% en los últimos tres meses- dio crédito al pronóstico de más de un millón de desocupados hecho por algunos analistas económicos. Esta ominosa perspectiva unificó, momentáneamente, al disperso frente sindical y la central obrera obtuvo del gobierno un decreto en el que se declaraba una tregua social de 180 días, en los cuales quedaban prohibidos los despidos y las huelgas.

La tregua social, decidida a principios de octubre, fue prolongada por un postrer intento de rehabilitar la política de concertación entre el Estado, la CGE y la CGT, hacia fines del mismo mes. Ambas iniciativas ilustraron las buenas intenciones del ministro de economía pero también su imposibilidad para concretarlas. Los conflictos laborales no disminuyeron en intensidad: las demoras en el pago de los aumentos otorgados, la interpretación de las cláusulas contractuales, nuevas demandas salariales y las disputas intra-sindicales continuaron manteniendo alto el nivel de las huelgas. La amenazante situación económica no provocó una caída de los conflictos, sino que hizo que fueran más largos y de más difícil solución, al favorecer la resistencia de los empresarios. En estas condiciones comenzó a ser cada vez más frecuente la intervención de los grupos guerrilleros -de nuevo en acción después de la muerte de Perón- y la consiguiente pérdida de control del conflicto por parte de los trabajadores involucrados. La guerrilla intervenía secuestrando y asesinando a directivos de las empresas para forzarlos a aceptar las demandas obreras; estas acciones desencadenaban represalias igualmente violentas sobre los delegados obreros por parte de grupos también clandestinos. Las empresas fueron transformándose, así, en un terreno más de la ola de violencia que servía de dramático contexto a la crítica coyuntura económica.

Tampoco el nuevo pacto entre empresarios, sindicatos y Estado firmado el 25 de octubre tuvo mejor fortuna.

Para entonces, el salario real había caído por debajo de los incrementos formidables obtenidos en las negociaciones colectivas de junio. Presionado por sus aliados sindicales, el ministro Cafiero se apresuró a otorgar un aumento salarial de un 27% a partir del 1 de noviembre sin consultar a la CGE. Esta errática conducta del ministro de economía condenó el acuerdo a sólo una semana de haber sido firmado y anuló al mismo tiempo la ya escasa credibilidad de la CGE entre los empresarios. Una nueva organización, la APEGE, controlada por el gran capital industrial y agrario, ocupó su lugar y desde ella los productores rurales comenzaron las hostilidades suspendiendo el envío de ganado por una semana a los mataderos en dos oportunidades, en setiembre y noviembre.

Nuevas medidas restrictivas empezaron a ser discutidas en el gabinete económico, seguramente, más moderadas que las lanzadas por C. Rodrigo, pero, no por ello menos reveladoras del completo colapso del impulso reformista que animó el retorno del peronismo al poder. Por sus antecedentes, el ministro Cafiero no podía ser asociado al enfoque monetarista de Gómez Morales y compartía, más bien, el espíritu contenido en el programa de transformaciones de estructura por el que Gelbard se había batido sin éxito. Que también él debiera concentrar sus energías en los problemas de coyuntura venía a probar, inapelablemente, que no eran tiempos de innovaciones reformistas. La suerte corrida por su proyecto más ambicioso fue, en este sentido, elocuente. En octubre propuso la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones, la Productividad y la Participación, cuyos objetivos eran, en primer lugar, coordinar la política de indexación de salarios y, en segundo lugar, estudiar la puesta en práctica de mecanismos de participación de los trabajadores en las empresas. El proyecto, calificado por la Sociedad Rural como una medida “sovietizante”, no llegó a ser sancionado porque su ingreso al parlamento coincidió con el simultáneo estallido de un nuevo y definitivo conflicto militar.

Elegido ministro con el apoyo sindical, Cafiero vacilaba frente a las graves decisiones que la evolución económica parecía imponer. Por otro lado, la perspectiva de administrar la crisis al servicio de un gobierno en el que, progresivamente, la suya era una presencia indeseable, desde que la presidente Isabel reasumiera sus funciones en octubre, tampoco facilitaba su situación. Los jefes sindicales, entre tanto, percibían, quizás como nunca antes, los problemas asociados a la participación en el poder que tan empecinadamente habían perseguido. Debido a su directo contacto con el gabinete económico no ignoraban el estrechamiento paulatino del margen de maniobras del ministro. Pero la opinión pública continuaba considerándolos -y no siempre de un modo halagador- cómo el sector más influyente en el gobierno, alimentando, con ello, las expectativas de los trabajadores. La inminencia de las decisiones económicas a tomar agudizó las presiones cruzadas que soportaban los sindicalistas, y hubo algunos que, para sustraerse a ellas, aconsejaron la renuncia de Cafiero a fin de sentirse libres cuando llegara el momento de tener que oponerse al plan de estabilización que sabían inevitable. Esta compleja situación se resolvería de otro modo, sin embargo.

En enero de 1976 la presidente Isabel retomó la iniciativa y reorganizó el gobierno, desprendiéndose de los ministros ligados a la entente sindical-política, para rodearse nuevamente de un grupo de asesores extraños al movimiento peronista. Algunos eran sobrevivientes de la clique formula por López Rega, otros eran oscuros y ambiciosos funcionarios, y, ambos, prontos a acompañar a esta mujer sola, heredera de un movimiento político en cuya azarosa historia no había participado, cuyos líderes naturales detestaba y cuyos seguidores no le inspiraban sino desconfianza, vista la inquietante facilidad con la que pasaban de prometerle fidelidad a movilizarse abiertamente en contra de sus llamados a la productividad y al sacrificio. Este nuevo golpe de palacio puso de manifiesto la intrínseca debilidad de la coalición de sindicalistas y políticos *visa-a-vis* el poder de veto que todavía retenía la viuda de Perón.

La reacción sindical de los desplazados fue violenta, sobre todo, entre los líderes sindicales. Muy pronto, sin embargo, moderaron sus reservas y optaron por replegarse en una desesperanzada pasividad. Esta actitud le fue dictada por la conciencia de que el derrumbe era inevitable, como lo presagiaba una abortada insurrección militar en diciembre. En consecuencia, convenía cerrar filas detrás de la que, más allá de las discrepancias, continuaba siendo la sucesora del viejo caudillo y poseía, por ello mismo, una función emblemática central dentro del peronismo. Actuando con la mirada puesta en lo que vendría después del inminente golpe de estado, sindicalistas y políticos desoyeron los llamados de la oposición civil para evitarlo y se negaron a constituir un gobierno sin Isabel Perón. Esta, por su parte, dedicaba sus últimos días a lanzar una serie de medidas represivas y económicas que imaginaba afines a las exigencias de las jerarquías militares y al mundo de los grandes negocios: patética iniciativa que recibió como respuesta el primer *lock-out* empresarial que conociera el país en muchos años.

Atraído por la fuerza irresistible de sus contradicciones internas, por los conflictos que había desatado a lo largo de sus tres años en el poder, el movimiento peronista preparaba su caída. En las primeras semanas de marzo, una ola de protesta contra la política de austeridad anunciada por el reemplazante de Cafiero en el ministerio de economía comenzó a crecer en las fábricas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Este fue el momento en que los militares salieron de sus cuarteles y retomaron el poder de manos de quienes se habían ocupado de disipar, con diligencia suicida, la credibilidad que restaba al gobierno surgido de las elecciones más democráticas llevadas a

cabo en los últimos veinticinco años de la convulsionada historia política de la Argentina.

5. EL SINDICALISMO ENTRE LA REIVINDICACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN

Escribiendo pocos días después del triunfo electoral de 1973, un analista de cuestiones sindicales describió agudamente el estado de ánimo de los líderes obreros cuando afirmó: “(ellos) se sienten solos; encuentran que ya no son ‘únicos y exclusivos’. Y para peor, están frente a la posibilidad de cuatro años de gobierno peronista”. Cabe imaginar que sus lectores habrán hallado creíble la primera parte de su comentario, en la que se refiere a la desazón de los sindicalistas al verse postergados en los favores del viejo caudillo por los jóvenes radicalizados recién llegados al movimiento. Pero, ¿por qué habrían de lamentar, se habrá preguntado más de uno, la perspectiva de cuatro años de gobierno peronista? ¿Acaso ésta no hacía más próxima la meta de la participación en las decisiones oficiales que por tantos años habían reclamado? Vista retrospectivamente, la paradoja se esclarece, porque las imposiciones del Pacto Social, primero, el enfrentamiento con el grupo presidencial, después, y, finalmente, los dilemas que afrontaron durante el período en que su influencia fue más directa, depararon a los sindicalistas más complicaciones que beneficios. Es verdad que hacia marzo de 1973 no podían prever en sus detalles una historia todavía por hacerse. Pero, para un sindicalismo formado a través de 18 años en la oposición, la presencia de un gobierno capaz de reclamarles su solidaridad política suponía la entrada en un escenario nuevo e incierto. Los acontecimientos posteriores vinieron a corroborar sus prevenciones y pusieron de manifiesto cuán compleja es siempre para los sindicatos la compatibilización entre la defensa de intereses sectoriales y las responsabilidades asociadas a la participación en el gobierno. Ante el conflicto entre su función reivindicativa y las obligaciones derivadas de la gestión pública, la tendencia de los sindicalistas ha sido replegarse sobre su rol tradicionalmente defensivo y, sin confesarlo en forma abierta, han encontrado más fácil tratar con un gobierno conservador que con un partido amigo devenido oficialista. Si bien un gobierno conservador no les asegura la protección del Estado, tan necesaria, los libera, en cambio, de compromisos políticos últimos y, de este modo, los líderes sindicales no se ven forzados a esa gimnasia desgastante que les impone el condicionamiento de su autonomía profesional y la presión simultánea de sus bases. Participar permaneciendo en la oposición, he ahí la fórmula que mejor condensa la orientación dominante en los círculos sindicales y el principio que comandó la estrategia de presión política desplegada por el sindicalismo peronista en el período posterior a 1955.

La vuelta de Perón al gobierno modificó sustancialmente las condiciones que habían servido de marco a la participación conflictual de los sindicatos en el sistema político. El cambio se tradujo, en primer lugar, en un doble reconocimiento de los líderes sindicales. Por un lado, un reconocimiento político, visible en el lugar de privilegio que volvieron a ocupar en el movimiento gobernante. El énfasis puesto por el viejo caudillo al descalificar las críticas contra ellos provenientes de la juventud radicalizada -críticas que hacían eco a otras suyas del pasado- no dejó dudas sobre el rumbo amistoso que se proponía imprimir desde el gobierno a relaciones que habían sido tan conflictivas en el llano. Por otro, un reconocimiento institucional, por el que los líderes sindicales pasaban a la condición de interlocutores válidos del gobierno con iguales títulos que los empresarios y los partidos. Colocado en perspectiva, el nuevo trato oficial ofrecido a los sindicatos innovaba sobre el reconocimiento *de facto* que ya habían alcanzado en el sistema político en un aspecto fundamental: les confería una legitimidad que no siempre recibieron por parte de cuantos se habían visto empujados a negociar con ellos ya sea la tolerancia para sus gobiernos, ya sea el respaldo para la gestación de golpes de estado. La contraparte de tantos halagos no habría de ser menos significativa y los jefes sindicales lo comprobaron bien pronto cuando se encontraron sujetos a los compromisos derivados del Pacto Social. Tenemos, así, en segundo lugar, que el retorno de Perón al gobierno y la puesta en marcha de la política concertada de ingresos implicaron limitaciones severas para los sindicatos, en sus funciones de articuladores de las demandas obreras e intermediarios entre sus bases y los poderes públicos y los empresarios. Considerada desde este ángulo, la nueva situación política abierta en 1973 retrotrajo al sindicalismo, por un camino diferente, a la misma pasividad en materia reivindicatoria que experimentara durante el régimen autoritario del presidente Onganía.

Si, en sus efectos, modelos políticos tan contrastantes como los de Perón y Onganía convergían, era porque uno y otro habían partido de un diagnóstico común: librado a la dinámica propia de un orden competitivo, un país con grupos de presión tan poderosos y, a la vez, tan enfrentados entre sí, estaba condenado a un crecimiento económico errático, a la radicalización de los conflictos. Para conjurar estos peligros, el jefe del gobierno militar instalado en 1966 recurrió al congelamiento del sistema político y, en el caso de uno de los actores centrales de éste, el sindicalismo, además de volcar todo el peso del arsenal de controles sobre las organizaciones obreras que la legislación sindical depositaba en manos del gobierno, suprimió aquel terreno en donde su poder de presión era más manifiesto, el de las negociaciones colectivas. Sabiendo del fracaso de la tentativa de Onganía, que sirvió para intensificar los males que se proponía combatir, y confiando en las bondades de un esquema político al que atribuía la estabilidad de las social-democracias europeas, Perón convocó a las fuerzas económicas y políticas a formar parte de una vasta trama de acuerdos a ser arbitrados desde el Estado: se trataba, básicamente,

de la incorporación del sistema político al aparato gubernamental.

Por sus objetivos, por sus métodos, el Pacto Social constituyó la versión más acabada de este diseño político. La finalidad que por su intermedio el nuevo gobierno perseguía era neutralizar los efectos desestabilizadores de las pujas distributivas. Para ello, se propuso sustituir la negociación descentralizadora entre empresarios y sindicatos por una negociación central única en el marco fijado por el programa económico oficial. Los objetivos de la política concertada pasaron a depender, así, de la capacidad de las asociaciones gremiales convocadas para suscitar la conformidad de sus bases hacia los acuerdos en la cúpula alcanzados bajo la tutela del gobierno. En otras palabras, la clave de la negociación descansaba en que las partes se comportaran como actores unificados. Pero, entre las expectativas y las tensiones despertadas por la vuelta del peronismo al poder y las ventajas y reaseguros ofrecidos por el Pacto Social, la brecha fue demasiado grande para que la ya frágil autoridad de la CGT y la CGE lograra colmarla. La sucesión de acuerdos de la política concertada fue deviniendo progresivamente artificial, sin consecuencias sobre la evolución real de precios y salarios, a medida que las organizaciones intervinientes fueron distanciándose de las demandas de las fuerzas que decían representar. Paralelamente, los conflictos sociales tendieron a expresarse fuera del contexto institucional, tomando la forma de huelgas salvajes, ocupaciones de fábrica, mercado negro, contrabando, conductas todas que dramatizaban la cisura entre un sistema político absorbido en el Estado, que ya no transcribía los intereses sociales y se debatía en un juego de influencias alrededor de Perón, y el plano de las relaciones de clase,

Si esta es la imagen de conjunto que surge cuando se examina el paulatino colapso del Pacto Social, una misma cisura se comprueba al observar sus consecuencias sobre el sindicalismo. La experiencia de la participación en la política concertada se manifestó en una agudización con el régimen de Onganía. Las rebeliones anti-burocráticas de fines de la década del sesenta volvieron a florecer en proporción directa al reflujó de la iniciativa de las direcciones oficiales de los sindicatos, ampliando el espacio por donde crecía la oposición sindical. Contra esta amenaza, las medidas represivas que los jefes sindicales alentaron desde sus posiciones en el gobierno eran recursos precarios porque, dirigidas como estaban a bloquear el surgimiento de liderazgos rivales, no daban respuesta al estado de movilización de sus bases que esos liderazgos procuraban articular. En rigor, sólo la recuperación de su poder de presión económica mediante el restablecimiento de las negociaciones colectivas podía sacarlos del *impasse*. A través de ellas, los líderes sindicales disponían de una vía ya prevista dentro del Pacto Social para anular los compromisos en que estaban envueltos, desentenderse de las complejas ecuaciones de la política económica nacional y reparar su alicaído prestigio entre sus bases. Es dudoso que las negociaciones colectivas aportaran, además, alguna solución al creciente deterioro del salario real. Dándole organicidad y alcance nacional a las múltiples luchas salariales que tenían lugar no harían más que potenciar la dispersión de las decisiones en el mercado de trabajo, frustrando la posibilidad de acuerdos que frenaran la inflación. Mas, ésta era una preocupación secundaria ante la urgencia de las necesidades organizacionales de los sindicalistas, que, a comienzos de 1975, iniciaron su campaña en pro de negociaciones salariales libres, transcurridos los dos años de vigencia de la concertación social.

Aunque para justificarla apelaron a la letra del Pacto Social, dicha campaña formaba parte de una empresa mayor. La muerte de Perón y, con ella, la disolución de esa formidable autoridad política que les había dictado obligaciones institucionales tan onerosas, despejó el camino para que los líderes sindicales ensayaran reeditar, con respecto al gobierno de la presidente Isabel, la modalidad de participación conflictual que habían seguido en otras oportunidades ante los poderes públicos. Recordando permanentemente al nuevo elenco gobernante cuán importante era su apoyo para la continuidad del gobierno, poniendo su iniciativa al abrigo de nuevos compromisos, el proyecto sindical se proponía explotar la futura coyuntura política para extender su influencia y extraer ventajas económicas para sus representados. Esta empresa vino a coincidir con un movimiento simultáneo de los asesores presidenciales inspirado por una parecida hostilidad frente a los acuerdos sociales y políticos heredados. Pero las intenciones de estos últimos eran mucho más radicales, al implicar el desplazamiento del Partido Radical, del grupo empresario encabezado por Gelbard, los cuadros políticos peronistas e, incluso, los sindicalistas mismos, de los lugares que ocupaban dentro del aparato gubernamental. Un Estado así liberado de hipotecas políticas podría encarar los drásticos reajustes que la crítica situación económica parecía imponer y colocar a su servicio el autoritarismo necesario.

Quedó, de este modo, repuesto, bajo una novedosa escenografía, un conflicto recurrente de la Argentina contemporánea, el conflicto que opuso, por un lado, a un sindicalismo asentado sobre una vasta movilización obrera y por otro, a gobiernos desprovistos de la solidaridad del mundo de los grandes negocios y asediados por un golpe militar en ciernes. La secuencia típica de este conflicto tendió a pasar por una primera etapa, caracterizada por las concesiones económicas y políticas a los sindicatos para obtener su moderación, bloquear nuevas amenazas y evitar la quiebra del ordenamiento institucional. Sin embargo, la eficacia de tales recaudos fue de corta duración, como habitualmente. Contra ella conspiraron, primero, la agudización de las tensiones inflacionarias, que trajeron la reacción de las empresas a los aumentos salariales. Luego, el malestar que reunió a las cámaras empresarias y la intervención breve pero significativa de algún jefe militar en la crítica a

una gestión oficial que fue vista como síntoma de debilidad y demagogia. La secuencia prosiguió con la segunda etapa, que condujo al lanzamiento del plan de austeridad económica y de disciplinamiento sindical; plan cuya drasticidad fue función de la demora con la que el gobierno se hizo eco de las presiones cada vez menos disimuladas de los ámbitos económicos y de la resistencia prevista a ser opuesta por los líderes sindicales y por los trabajadores.

La decisión gubernamental de ratificar el compromiso de convocar a las negociaciones colectivas puso en funcionamiento la secuencia descrita. En la coyuntura de 1975 la apertura de la libre contratación de los salarios no podía sino debilitar el ya escaso control del gobierno sobre el comportamiento de las principales variables económicas. Al ceder a las demandas sindicales con el objeto de ganar tiempo, mientras procuraban recomponer las bases de su poder concertando nuevas alianzas, la presidente Isabel y sus asesores desencadenaron expectativas que sirvieron para reimpulsar la movilización obrera, retraída durante los meses anteriores. Las largas semanas abarcadas por la gestión de Gómez Morales en el ministerio de economía fueron pautadas por el agravamiento incesante del cuadro económico, la pasividad oficial y la marcha inexorable hacia el enfrentamiento con los sindicatos. Cuando el grupo presidencial se sintió suficientemente fuerte y se dispuso a actuar, el descalabro económico era de tal amplitud que las medidas para conjurarlo debieron ser también extraordinarias. Pero la magnitud de los reajustes decididos, tuvieron, además, el obvio propósito de colocar a los líderes sindicales a la defensiva marginándolos, en un mismo gesto, del sistema de poder.

El desenlace del conflicto, que por sus actores y las cuestiones en litigio recordaba a otros anteriores, se apartó de la historia conocida. A la hora crucial, el gobierno no contó con la colaboración de los empresarios y los militares. La neutralidad de estas fuerzas, en particular de los últimos, cuyo apoyo fue crítico para el éxito de intentos semejantes, resolvió el enfrentamiento en favor del sindicalismo. Si en el pasado inmediato, la intervención sindical había operado, sobre todo, de contragolpe, impidiendo la estabilización duradera de las políticas anti-inflacionarias, en esta oportunidad les restó efectividad en el mismo momento en que fueron concebidas. Como los acontecimientos por venir habrían de demostrar, el abandono del grupo presidencial por parte de sus presuntos aliados -al que debían su victoria los líderes sindicales- no fue independiente de una estrategia que apuntaba al derrumbe del peronismo, dejándolo librado a sus contradicciones internas, a sus dificultades para responder simultáneamente a las exigencias de gobierno y a las aspiraciones de su masa adicta. A la realización de dicha estrategia los sucesores de Perón se prestaron espontáneamente, sin recursos para formular una opción. Nunca quedó esta falencia tan manifiesta como cuando los sindicatos, la llamada "columna vertebral del peronismo", se convirtieron en el sector influyente del gobierno luego de provocar, con su triunfo en las negociaciones colectivas, el retiro de la presidente y la renuncia de sus asesores.

La carencia de un programa que trascendiese el campo de las demandas inmediatas se puso en evidencia tan pronto los líderes sindicales se encontraron en el centro del nuevo esquema de poder. Enfrentados con las responsabilidades gubernamentales, se limitaron a trasladarlas a los técnicos que habían llevado al ministerio de economía para ocuparse más bien de lograr posiciones en el aparato estatal y mejoras económicas para sus bases. Esta división de tareas era congruente con la mentalidad de grupo de presión en la que se había formado el sindicalismo. Durante los 18 años precedentes, los sindicatos racionalizaron sus luchas en nombre de un modelo social que condensaba su visión retrospectiva de lo que fuera el régimen peronista en la década del 40 y del 50. Más que un programa de gestión, éste consistía en una lista de reformas de estructura en armonía con los valores distribucionistas y nacionalistas del peronismo. No obstante, tales reformas constituyeron una meta lejana que casi no influyó sobre sus prácticas sindicales. Como su cristalización sólo podía venir por una vuelta -remota- del peronismo al poder, el sindicalismo se concentró en una actividad reivindicativa, privilegiando las demandas inmediatas, económicas y políticas, de los trabajadores. La traducción de las reformas de estructura en un plan de gobierno fue, así, postergada *sine die*, hasta el advenimiento de un poder con respaldo popular y, en los hechos, aquellas quedaron reducidas a formar parte de la retórica política que acompañaba las luchas sindicales. Los años que los sindicatos pasaron confinados a una política fundamentalmente defensiva acentuaron esta tendencia reivindicacionista; los líderes sindicales se consideraron relevados de aportar soluciones positivas e intervinieron actuando como grupo de presión.

Cuando las vicisitudes del proceso político del país condujeron al peronismo de nuevo al poder y, más tarde, ampliaron la gravitación de los sindicalistas en el gobierno, el peso de los hábitos adquiridos les impidió desempeñar un papel constructivo en los momentos críticos. Su intervención siguió siendo tributaria de una perspectiva sectorial. El énfasis puesto en el alza de salarios que, en la coyuntura, no podía sino ser autodestructivo, y realimentador de la inflación, mal se compaginó con los esfuerzos de los funcionarios económicos por frenar el colapso de la economía. Visto desde un plano más general, abrió serios interrogantes sobre la validez de sus reclamos del pasado en cuanto a ser convocados a participar en el planteo y la resolución de los problemas nacionales. Es verdad que al llegar la ocasión en que dicha participación se hizo efectiva, la necesidad de rehabilitarse ante sus bases les impuso prioridades más estrechas. Esta imposición no violentó, empero, sus tendencias naturales ni descartó una contribución que pudo ser más global y coherente con el grado

de presión social y política que ejercían.

Esta falencia se manifestó, finalmente, también en el último acto de la accidentada experiencia del peronismo en el gobierno. La decisión de la presidente Isabel, al disolver la entente sindical-política que gobernó durante su temporario retiro y retomar el control del poder a comienzos de 1976, reavivó los peligros de una quiebra institucional. La negativa de los líderes sindicales a sumarse a una salida política que neutralizara las amenazas confirmó su renuencia a asumir responsabilidades más vastas que la defensa a largo plazo de su condición de grupo de presión en el sistema político. Pero continuar con una política de grupo de presión implicaba prolongar conflictos en los que ni los trabajadores ni sus adversarios podían alcanzar una victoria definitiva. Significaba reactivar las tensiones sociales y agregar nuevos estímulos a la descomposición del orden político perseguida por los partidarios de la violencia. El resultado no podía ser otro que hacer cundir el desaliento entre los trabajadores y llevar a sectores importantes de la población, cansados por la sucesión de huelgas, los enfrentamientos de palacio y el caos económico, a clamar por un gobierno fuerte, en condiciones de restablecer la paz social, aún al precio de la supresión de las garantías democráticas. La renuncia de los líderes sindicales a ofrecer una opción a la crisis aceleró la debacle de la democracia y, a la vez, del sindicalismo, ya que ambos fueron anulados en el mismo proceso. El poder sindical probó ser, en definitiva, como el poder de Sansón, capaz de provocar la caída de las columnas del templo, pero no de evitar que lo hicieran sobre su cabeza.